

REPÚBLICA DE COLOMBIA



JUZGADO VEINTINUEVE DE FAMILIA DE BOGOTÁ

Bogotá D.C., (27) veintisiete de septiembre de dos mil veintidós (2022).

PROCESO: MEDIDA DE PROTECCIÓN – INCIDENTE DE INCUMPLIMIENTO – CONVERSIÓN MULTA EN ARRESTO DE ANDREA LUCIA RODRÍGUEZ MENDEZ EN CONTRA DE BRAYAN STEVEN ARIAS CRISTANCHO. 2021-0895

ASUNTO:

Conforme a lo previsto en el art. 4º de la Ley 575 del 9 de febrero de 2000, que modificó la Ley 294 de 1996, procede el despacho a considerar la viabilidad de expedir la orden correspondiente, atinente a la efectividad de la determinación adoptada el 8 de noviembre de 2021, por la Comisaría de Familia Centro de Atención Penal Integral a Víctimas -CAPIV- de esta ciudad.

ANTECEDENTES:

Mediante providencia del 8 de noviembre de 2021, la Comisaría de Familia Centro de Atención Penal Integral a Víctimas -CAPIV- de esta ciudad, impuso multa al señor BRAYAN STEVEN ARIAS CRISTANCHO, providencia que fue confirmada por el Juzgado Veintinueve de Familia de esta ciudad, mediante sentencia de fecha 19 de enero de 2022.

Notificado por aviso el señor BRAYAN STEVEN ARIAS CRISTANCHO, de la confirmación de la resolución proferida por la Comisaría de Familia Centro de Atención Penal Integral a Víctimas -CAPIV- de esta ciudad, y en consecuencia la sanción impuesta y le advirtió que cuenta con 5 días a partir de la misma, para consignar el valor de la sanción de la multa impuesta, so pena de hacerse acreedor a las sanciones allí indicadas.

Es de anotar que la multa impuesta al querellado tuvo su origen por el desacato a la medida de protección ordenada en decisión 21 de octubre de 2021, por la mencionada Comisaría.

Así mismo en providencia de fecha 5 de julio de 2022, la Comisaría de Familia Centro de Atención Penal Integral a Víctimas -CAPIV- de esta ciudad, ordenó remitir el expediente, para ser resuelta la conversión en arresto correspondiente al señor BRAYAN STEVEN ARIAS CRISTANCHO como consecuencia de la no cancelación de la multa a él impuesta con ocasión al primer incidente de incumplimiento, razón por la cual fue ordenada la remisión.

CONSIDERACIONES:

Prevé el art. 4º de la ley 575 de 9 de febrero de 2000, que reformó el art. 7º de la Ley 294 de 1996, en su literal a) que el incumplimiento a las medidas de protección dará lugar a las siguientes sanciones:

Por la primera vez, multa entre 2 y 10 salarios mínimos legales mensuales, convertibles en arresto, la cual debe consignarse dentro de los cinco días siguientes a su imposición. La conversión en arresto se adoptará de plano mediante auto que sólo tendrá recurso de reposición, a razón de 3 días por cada salario mínimo.

De otro lado, establece el inciso 3º del art. 17 de la citada Ley (575 de febrero 9 de 2000), que cuando a juicio del Comisario sea necesario ordenar el arresto, luego de practicar las pruebas y oídos los descargos, le pedirá al Juez de Familia o Promiscuo que se expida la orden que corresponde, lo que decidirá dentro de las 48 horas siguientes.

A su turno, el inciso final ibídem, prevé que son aplicables al procedimiento previsto en esta Ley (575 de 2000), las normas procesales contenidas en el Decreto 2591 de 1991, en cuanto su naturaleza lo permita. Y de conformidad con el capítulo V. art. 52 del decreto 2591 de 1991, reglamentario de la acción de tutela, consagrado en el art. 86 de la Constitución Política de Colombia, en materia de sanciones, determina que la persona que incumpliere una orden de un Juez proferida con base en el presente Decreto incurrirá en desacato sancionable con arresto hasta de seis meses y multa hasta de 20 salarios mínimos mensuales, salvo que en este decreto ya se hubiere señalado una consecuencia jurídica distinta y sin perjuicio de las sanciones penales a que hubiere lugar.

En sentencia C-175 de 1983, la Corte Constitucional señaló "...que únicamente las autoridades judiciales tienen competencia para dictar actos por medio de los cuales se lleve a cabo alguna de las actividades a que se refiere la norma dentro de las cuales se encuentra la imposición de penas privativas de la libertad. Por tanto y a la luz del citado canon ya no es posible que autoridades administrativas de cualquier índole impongan, para el caso en estudio, pena de arresto..."

En efecto la Corte Constitucional señaló en providencia C-024 de enero 27 de 1994, que "...La Constitución establece una reserva judicial a favor de la libertad individual, siendo indispensable el mandamiento escrito de autoridad competente, con las formalidades legales y por motivo previamente definido en la ley, para que una persona pueda ser reducida a prisión, arresto o detención. En adelante, solamente las autoridades judiciales tienen la competencia para imponer penas que conlleven la privación de la libertad. En consecuencia a la autoridad administrativa le está vedado imponer a mutuo propio las penas correctivas que entrañen directa o indirectamente la privación de la libertad, salvo mandamiento escrito de autoridad judicial competente..."

Al tenor de la norma antes citada, igualmente en acatamiento a lo dispuesto en el art. 28 de la Carta Política, según el cual la privación de la libertad no puede efectuarse “sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial competente”, con las formalidades legales y por motivo previamente definido en la ley y de conformidad con las anotaciones jurisprudenciales, es este juzgado el competente para proferir la orden de captura y señalar el lugar de retención del demandado.

En igual sentido la misma Corporación en sentencia C-295 de 1996, señaló “...La orden de detención solo puede provenir de una autoridad judicial y en manera alguna es potestativo de los agentes de las administraciones seccionales como funcionarios administrativos que lo son...”.

En este orden de ideas, al querellado se le impuso pagar como multa, el equivalente a dos (2) salarios mínimos legales, según consta en providencia del 8 de noviembre de 2021 convertible en arresto en caso de incumplimiento de dicha decisión.

Según decisión emitida por la Comisaría de Familia Centro de Atención Penal Integral a Víctimas -CAPIV- de esta ciudad, el 5 de julio de 2022, el accionado no acreditó el pago o consignación del valor de la mencionada multa, acontecimiento que tampoco ha demostrado en esta instancia.

*Así las cosas, acreditado como se encuentra el incumplimiento por parte del incidentado, del pago de la multa impuesta de dos (2) salarios mínimos legales mensuales vigentes, se hace procedente convertirla en arresto a razón de tres (3) días por cada salario mínimo legal mensual, para un total de **SEIS (6) DÍAS**, sanción que deberá cumplir en las instalaciones de la Cárcel Distrital de esta ciudad, debiéndose para ello, solicitar de la Policía su captura y remisión a la Institución mencionada. En consecuencia, se comunicará esta decisión mediante oficio, al Comandante de Policía Metropolitana de Bogotá, a la citada Comisaría y al director de la mencionada cárcel, a quienes se les remitirá copia de esta providencia; y se dispondrá la oportuna devolución del presente diligenciamiento a la oficina de origen, previas las pertinentes constancias.*

*Por lo expuesto, el **JUZGADO VEINTINUEVE DE FAMILIA DE BOGOTÁ D.C.**,*

RESUELVE:

PRIMERO: ORDENAR el arresto de **BRAYAN STEVEN ARIAS CRISTANCHO**, identificado con la C.C. No. 1.030.589.905, el que deberá cumplir en la Cárcel Distrital local, en virtud a la conversión de la multa que le fue impuesta por la Comisaría de Familia Centro de Atención Penal Integral a Víctimas -CAPIV de esta ciudad, confirmada por Juzgado Veintinueve de Familia de esta Ciudad; de imponer dos (2) salarios mínimos legales mensuales vigentes, a razón de tres (3) días por cada uno de ellos, para un total de **SEIS (6) DÍAS**, según acto

administrativo y sentencia de fechas 8 de noviembre de 2021 y 19 de enero de 2022, esta última que la confirmó.

SEGUNDO: Para la captura, líbrese oficio al Comandante de Policía Metropolitana de Bogotá - MEBOG y a la Dirección de la Cárcel Distrital de esta ciudad, para que lo recluya, debiendo la Comisaría de Origen, tramitar los oficios originales, remitidos por este Despacho Judicial, anexos a la carpeta.

TERCERO: En firme esta decisión, devuélvase la actuación a la Oficina de origen, dejando las pertinentes constancias.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

SANDRA MEJÍA MEJÍA
JUEZ.

JUZGADO VEINTINUEVE DE FAMILIA DE
BOGOTÁ D.C.

El anterior auto se notificó por estado No. 101

Hoy (28) de septiembre de 2022

CAROLINA SANTAMARÍA LUNA
Secretaria

Firmado Por:
Sandra Mejia Mejia
Juez Circuito
Juzgado De Circuito
Familia 29 Oral
Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: 55dfea8bae5795706189201ccb90dc29541a8ca54a76911a1eee876dc6849861
Documento generado en 27/09/2022 02:11:37 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>